

BOLETIN DE NOTICIAS
COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 179

FECHA: 28 de Octubre de 2013

SUMARIO

PAÍS	CONTENIDO	NºPG.
COLOMBIA	LA USURPACIÓN DEL TERRITORIO. DOS CASOS PARADIGMÁTICOS: CURBARADÓ Y PITALITO	2
EL SALVADOR	DECLARACIÓN DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA UCA ANTE EL CIERRE DE TUTELA LEGAL DEL ARZOBISPADO	5
	LUCHA ELECTORAL, ENFRENTAMIENTO DE CLASE Y LA ESTRATEGIA DEL IMPERIO	7
GUATEMALA	GUATEMALA EN EL OLVIDO	11
HAITÍ	HAITÍ FRENTE A LAS DEBACLES POLÍTICAS Y ECOLÓGICAS	13
HONDURAS	PROGRAMAS ELECTORALES	15
MÉXICO	CONDENAMOS ASESINATO DE LUCHADORA SOCIAL EN ATOYAC, GUERRERO	16
NICARAGUA	ALERTA ROJA POR DENGUE	17
PANAMÁ	FRENTE SANTEÑO CONTRA LA MINERÍA	18
VENEZUELA	HABILITAR AL PUEBLO BOLIVARIANO ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE	19

COLOMBIA

LA USURPACIÓN DEL TERRITORIO. DOS CASOS PARADIGMÁTICOS: CURBARADÓ Y PITALITO

CURBARADÓ:

Revelaciones del empresario preso Irving Bernal coinciden con la exclusión de que son víctimas millares de reclamantes de tierra afrodescendientes

Poco a poco lo que planearon en el gobierno de Uribe, los empresarios beneficiarios del paramilitarismo están a punto de conseguirlo en el gobierno del presidente Santos.

En unos días serán nuevamente convocados a elecciones los habitantes de Curvaradó y Jiguamiandó, sin que en el fondo el propósito empresarial de lograr que los consejos comunitarios sean sometidos a su modelo de desarrollo, se haya modificado.

Irving Bernal, empresario palmero, bananero y ganadero reveló los planes concertados con el alto gobierno de Uribe para que a través de las alianzas estratégicas se simulara una devolución de tierras a las comunidades afrodescendientes despojadas y continuar los agronegocios.

Bernal se encuentra con detención domiciliaria. En la etapa de juicio en el proceso al que se encuentra vinculado reconoció su responsabilidad como co propietario junto con el paramilitar Raúl Hazbún de la empresa Palmadó en sus actuaciones en las tierras colectivas.

Bernal afirmó que se vinculó con la siembra de palma aceitera en Curvaradó por la promoción que del cultivo hiciera el gobierno Uribe dentro del plan 2020. Las metas de sustitución de combustibles fósiles por agrocombustibles de la unión Europea, en particular, y el boom de la economía verde, generaba una gran demanda de etanoles y aceites por lo que involucrarse en el negocio palmero generaría gran rentabilidad.

En Palmadó junto con la esposa de Hazbún, y los empresarios ya condenados, Duque y Zea, conforme a los estímulos del gobierno solicitaron al Banco Agrario, 1500 a 1700 millones de pesos en créditos que les fueron aprobados. De este total alcanzaron a recibir 489 millones con documentación por la que pago 20 millones de pesos buscando legalizar tierras a través de un abogado.

Con las denuncias crecientes una vez convencido de que no era posible proseguir con las plantaciones de palma en Curvaradó, por tratarse de un territorio colectivo, se reunió con “20 o 40 personas de Carmen del Darién para que no se perdiera la plata”. Agregó en la etapa de juicio que en 2010 todo estaba listo con el Ministro del Interior de Álvaro Uribe, Fabio Valencia Cossio, y con algunos afrodescendientes para devolver la tierra y desarrollar las Alianzas Productivas.

Precisó que todo se fue al traste por que se atravesó la ONG Justicia y Paz y la Corte Constitucional y “ahí empezó el calvario (...) En el ministerio del interior con Valencia Cossio se llegó al acuerdo que se haría entrega formal de la tierra en la región, a la mañana siguiente salían los vuelos, pero nos llamaron en la noche por que se habían suspendido los acuerdos”.

Bernal al referirse al tema de la restitución de tierras en Curvaradó en ese 2008 y en el hoy expresó: “en ese tiempo las comunidades no tenían el modo de tomar esa decisión ni la tienen actualmente desafortunadamente” (...) “el gobierno no ha sido capaz de entregarles la tierra por la presión que recibe de las ONG, la ONG Justicia y Paz se ha opuesto totalmente a que ellos reciban la tierra, lo ha impedido por todas las formas de que ellos definan su gobernabilidad y el manejo de lo que les otorgó la ley 70”.

Bernal continúa pensando en su inversión a pesar de la ilegalidad de la misma por lo que expresó: “Yo tendría la esperanza de que si algún día le entregan las tierras a las comunidades afros ese valor que hay en infraestructura ya sea ellos o el gobierno, me puedan dar alguna fórmula de como descargar el valor contable y fiscal que tengo allí”.

Parece que el sueño empresarial de Bernal coincide con los que se encuentran operando en el Curvaradó. En ese territorio colectivo empresarios continúan no solo intimidando, amenazando si no

buscando fórmulas para asegurar que las directivas de los consejos comunitarios que sean elegidos en Curvaradó y Jiguamiandó faciliten sus inversiones y la continuidad de sus negocios que no han cesado.

Unas semanas atrás se conoció que empresarios están pagando votos para la asamblea comunitaria. También que con la exclusión que lograron de afroestizos de los censos para participar en la elección en contravía de las decisiones de la Corte Constitucional, tienen cooptado un gran número de votos para lograr sus propósitos. Adicionalmente vienen impulsando montajes judiciales contra los líderes y líderes que afirman una restitución en derecho y con una protección de un modelo de desarrollo distinto, conforme a la ley 70 y las disposiciones ambientales.

Los empresarios beneficiarios del paramilitarismo, algunos de ellos, vinculados con Sor Teresa Gómez, tienen claro que si logran una junta de consejos comunitarios que asuma la propuesta de Alianzas Estratégicas no solamente sus inversiones no se perderán sino que se incrementarán sus negocios.

Así las cosas, lo que no lograron con Uribe, lo lograrán en el gobierno de Santos, que proclamó la ley de víctimas.

Por eso, muchos creen que el sueño de Bernal se cumplirá. Al fin y al cabo el capítulo de la paraeconomía no ha terminado. Bernal aún privado de la libertad verá sus sueños realizados, los mismos que se iniciaron a concretar con los acuerdos entre Chiquita Brands y Carlos Castaño, en los que él participó.

1er parte indagatoria Irving Bernal: <http://ge.tt/6WmeqFw/v/0?c>

2da parte indagatoria Irving Bernal. Audio: <http://ge.tt/1k9NrFw/v/0?c>

3er parte audio: <http://ge.tt/1BqsdFw/v/0?c>

Bogotá, D.C. octubre 24 de 2013

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

PITALITO:

URGENTE: LA COMUNIDAD RETORNADA A LA VEREDA PITALITO REQUIERE SU SOLIDARIDAD

El día de hoy miembros de la comunidad retornada a la vereda Pitalito, han escuchado el rumor de que serán desalojados mañana, 24 de Octubre, en razón a la supuesta orden de un juez; sin embargo, ni la Comunidad ni sus representantes han sido notificados de tal determinación, ni han sido convocados a proceso judicial alguno que dé lugar a este tipo de decisiones, por lo que el desalojo de la comunidad sería una acción irregular y violatoria de las garantías y derechos de la población desplazada en Colombia.

De otra parte, el sábado 19 de Octubre de 2013, miembros de organizaciones acompañantes y de la Comunidad, que se encontraban en el sitio conocido como los Manguitos solucionando problemas mecánicos del vehículo donde se transportaban, observaron que por la vía que conduce al asentamiento humanitario de las familias retornadas, transitaba una camioneta cuatro puertas blanca y de platón, con aproximadamente 10 hombres vestidos de civil que portaban armas de fuego.

Ante esta situación, de forma inmediata se dio aviso a las autoridades de policía, militares y civiles del departamento, a efectos de que se tomaran las medidas pertinentes para garantizar la vida e integridad física de la comunidad. Aproximadamente 20 minutos más tarde y solucionados los problemas del vehículo, los acompañantes se dirigieron a la comunidad, sin que observaran en la vía, la camioneta y sus ocupantes, siendo de aclarar que no existen caminos que conduzcan a otras veredas y que no pasen por la zona de vivienda de las familias retornadas, lo que sugiere que los civiles armados debieron refugiarse en alguna de las propiedades aledañas o cercanas a la vereda Pitalito.

La presencia de personal armado en inmediaciones de la comunidad, preocupa aún más si se tiene en cuenta que cerca de 15 días atrás dos hombres que se desplazaban en motocicletas, arribaron al asentamiento y tomaron varias fotografías de las familias y sus viviendas, inmediatamente se fueron.

Es claro entonces, que las amenazas que se ciernen sobre la comunidad retornada a la vereda Pitalito, son variadas. Por un lado, pueden ser sometidas a un nuevo desalojo arbitrario y por el otro a la represión extralegal por parte de lo que parecen ser ejércitos privados. Estos nuevos hechos, siguen poniendo en evidencia que los campesinos en Colombia no tienen garantías para retornar a sus tierras, dejando en entredicho la eficacia de la ley de víctimas y restitución de tierras.

Todo lo anterior amerita un nuevo llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir rodeando a las familias de Pitalito, a acompañarlas física y políticamente para evitar que en razón al ejercicio del derecho al retorno que están ejerciendo sean de nuevo víctimas de actos retaliativos.

Octubre 22 de 2013.

Última hora, 26.10.13:

Declaración emitida por la Plataforma por la Paz y los DDHH en Colombia, de la que forma parte nuestro Comité como integrante de la Plataforma Justicia por Colombia

RECLAMAMOS A LAS AUTORIDADES CIVILES Y A LA FUERZA PÚBLICA GARANTIAS DE PROTECCIÓN PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS DESALOJADAS DE LA VEREDA DE PITALITO

La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, Organización en la que nos integramos numerosas ONGs del Estado español que trabajamos por la defensa de los derechos humanos, seguimos expresando nuestro apoyo y solidaridad a los campesinos desplazados de la vereda de Pitalito, ubicada en jurisdicción de los municipios de Chimichagua y Curumaní del departamento del Cesar.

Según informaciones recibidas de miembros de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), ayer, viernes 25 de octubre, en horas de la tarde, tras una inspección ocular que se realizó en presencia del Ejército Nacional, del ESMAD, de la Personería y la Alcaldía Municipal de Chimichagua, y durante la cual las fuerzas policiales y del Ejército ubicaron cuatro anillos de seguridad que rodearon el lugar en que se encontraban las familias campesinas y sus acompañantes, se lanzó la orden de desalojo que se ejecutó de manera inmediata.

Con dolor comprobamos que el Estado colombiano vuelve a reproducir los hechos que acontecieron hace tres años, cuando las autoridades locales de Curumaní y Chimichagua no atendieron a las denuncias y solicitudes de las comunidades víctimas de despojo y accedieron a las pretensiones de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO, provocando así su revictimización.

Dada la rapidez de ejecución de los hechos nos preocupa la actual situación de desubicación y de vulneración de los derechos básicos en la que se encuentran dichas familias campesinas.

Por todo ello,

Exigimos:

A las autoridades locales y nacionales que brinden la atención necesaria para la supervivencia y seguridad de las familias afectadas, que revisen los protocolos de ejecución aplicados en este desalojo y que atiendan debidamente a la condición de “víctimas del conflicto armado” de las familias que les corresponda.

EL SALVADOR

DECLARACIÓN DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA UCA ANTE EL CIERRE DE TUTELA LEGAL DEL ARZOBISPADO

Comunicamos al pueblo de El Salvador que después de escribir, como Junta de Directores de la UCA, una carta al arzobispo, José Luis Escobar Alas, transmitiéndole nuestras apreciaciones, valoraciones e interrogantes sobre el cierre de Tutela Legal, y de informarnos ampliamente sobre sus motivos en una conversación, nos hemos reunido también con algunos de los miembros despedidos de la instancia y hemos escuchado su parecer sobre los hechos. Hemos leído, asimismo, tanto los comunicados del Arzobispado como los emitidos por los empleados despedidos. Con base en estas acciones, hemos decidido pronunciarnos públicamente. Lo hacemos por respeto al pueblo al que nos debemos desde el comienzo de nuestro caminar como universidad de inspiración cristiana y movidos por un gran amor a la Iglesia y a los salvadoreños.

La disolución de Tutela Legal nos ha extrañado y dolido profundamente. A lo largo de muchos años, hemos sido testigos de su meritorio trabajo al servicio de los más pobres y en defensa de las víctimas. A través de esta oficina, la Iglesia arquidiocesana ha velado por los derechos humanos y ha procurado asistencia legal, defendiendo las justas causas de los salvadoreños. De ese modo ha cumplido con el principal deber cristiano de estar al lado de los pobres, proteger a los desvalidos y esforzarse por defenderlos de la injusticia.

Efectivamente, la Oficina de Tutela Legal ha sido un notable símbolo de compasión y misericordia, de opción por el pobre y por la justicia por parte de la Arquidiócesis de San Salvador, desde que fue fundada por monseñor Arturo Rivera y Damas en 1982, prosiguiendo la labor que monseñor Romero inició con Socorro Jurídico. No podemos dejar de reconocer el gran empeño que puso también en la Oficina María Julia Hernández, y la proyección internacional que adquirió bajo su dirección, precisamente por ser símbolo de la defensa de las víctimas en casos de gran relevancia, como la investigación sobre la horrible masacre de El Mozote, que fue llevada hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ello, la Iglesia en El Salvador se hizo acreedora de credibilidad evangélica.

Sigue siendo crucial para la Iglesia católica y para El Salvador mantener la tradición de algunos de sus grandes pastores: monseñor Luis Chávez, monseñor Óscar Romero y monseñor Arturo Rivera Damas. Es un deber cristiano seguir brindando al pueblo salvadoreño un corazón compasivo, conmovido entrañablemente, como el de Jesús de Nazaret, frente a las víctimas de toda clase de injusticia. Hoy, como ayer, nos urge la palabra del mismo Jesús: "Misericordia quiero y no sacrificios" (Mt 12, 7). Por ello, vemos absolutamente necesario que nuestra Iglesia mantenga la preocupación activa por la justicia, tal y como lo ha hecho a través de Socorro Jurídico, Justicia y Paz, y Tutela Legal. Sin este símbolo, activo entre el pueblo, se pierde un testimonio valioso de lo que significa pastorear la Iglesia.

Indudablemente, aún no se han saldado satisfactoriamente las consecuencias de los crímenes cometidos en el tiempo de la guerra, y es humano, y por ello cristiano, darles seguimiento. Siempre denunciarnos la promulgación de la ley de amnistía de 1993, que ha impedido llevar a los tribunales tantos crímenes de guerra y contra la humanidad, o buscar formas auténticas de justicia transicional. Por tanto, hay un gran trabajo por hacer al lado de este pueblo que fue injustamente humillado y violentado. A nuestro juicio, no se pueden abandonar los casos que Tutela Legal ha presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuyas resoluciones todavía no han sido cumplidas por el Gobierno de El Salvador, especialmente la que sobre la masacre de El Mozote ha recibido ya sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A pesar de que la postura del Estado salvadoreño ante los derechos humanos ha cambiado desde 1992, sigue siendo necesario velar por la defensa de los mismos, en especial de cara a la población más vulnerable. Si bien es verdad, como ha expresado el Arzobispo, que la Iglesia, además de preocuparse por las terribles secuelas de la guerra, necesita ocuparse de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas de la violencia juvenil y, sobre todo,

de la que causan el narcotráfico y otras actividades ilícitas, por la situación de los presos, por el flagelo de los desaparecidos y por la preservación y cuidado delicado del medioambiente (que algunos pueblos originarios evocan como “madre tierra”), no por ello deja de ser necesario que Tutela Legal continúe ocupándose de ello. Ya lo estaba haciendo en el sonado caso de Baterías Record y en otros.

La Junta de Directores de la UCA piensa que el notable eco que esta decisión, no consultada con el conjunto del pueblo de Dios, ha despertado en amplios círculos de las Iglesias y de la ciudadanía, así como internacionalmente, recomendaría una reconsideración profunda. Los errores o deficiencias en una institución de la Iglesia sugieren no pocas veces su corrección en lugar de la supresión de la instancia. Lejos de perder credibilidad, la Iglesia crece cuando una autoridad es capaz de repensar, revalorar y, dado el caso, modificar una decisión importante. De cualquier manera, sentimos que es cristiana y eclesialmente valioso abrir todo este asunto tan doloroso a consulta amplia de tantas personas que desean que nuestra Iglesia no abandone, ni dé ocasión para que se piense que abandona, a las víctimas de la guerra y a sus familias, y siga esforzándose por defender los derechos humanos y la dignidad del pueblo, especialmente de los más vulnerables, empobrecidos y victimados.

En todo caso, es necesario que el Arzobispado garantice que se conservará y reactivará el Archivo Monseñor Arturo Rivera Damas de Tutela Legal, para que esté al servicio de la memoria histórica y de las posibles alternativas de justicia que puedan impulsarse en nuestro país. Muchos de los documentos que allí se guardan son el resultado de laboriosas investigaciones, de la valiente decisión de las víctimas de hablar, y tendrían el valor de indicios de pruebas de responsabilidad si se abrieran procesos judiciales.

Existe, además, un problema muy serio. En la conferencia de prensa que el Arzobispo dio el viernes 4 de octubre, acusó a los antiguos empleados de Tutela Legal de “irregularidades” financieras y administrativas en su trabajo. Pero se abstuvo de mencionar nombres y situaciones concretas, lo cual arrojó una sombra sobre todo el grupo, que no tuvo oportunidad de defenderse en ese momento. De hecho, las personas acusadas de un delito o de una conducta irregular en el desempeño de su oficio son inocentes mientras no se pruebe lo contrario. El 6 de octubre, los acusados emitieron un comunicado en el que dicen lo siguiente: “La labor de Tutela se basaba en proyectos sociales avalados por el señor Arzobispo, contando con constantes auditorías internas y externas puestas por los mismos cooperantes y la administración del Arzobispado, y [...] en ningún momento señalaron resultados negativos. Las cuentas de los fondos de cada proyecto están a nombre de la Arquidiócesis, y para retirar cualquier fondo se requería la firma mancomunada de dos monseñores que estaban debidamente autorizados por el señor Arzobispo. Ninguno del equipo de Tutela Legal, incluyendo al director, tenía autorización de firma para retirar fondos”.

Finalmente, pensamos que es muy difícil aceptar que el pastor no dé lugar a que las personas que trabajan a su lado desde hace años, en una labor también pastoral, reciban personalmente de él sus preocupaciones, sus decisiones y los motivos de estas. La Iglesia necesita en sus autoridades formas dialogantes de actuar para evitar el riesgo de reflejar modelos autoritarios impropios del seguimiento de Jesucristo.

Como ha afirmado el papa Francisco desde el inicio de su gobierno, es crucial “una Iglesia pobre y para los pobres”, y, evidentemente, con los pobres. Ello requiere de signos de parte de todos los sectores del pueblo de Dios, que manifiesten y hagan realidad este deseo, arriesgando el conflicto que puede sobrevenir, como le ocurrió a Jesús de Nazaret en su propia vida. Por ello, animamos a monseñor José Luis Escobar Alas a que en el caso de Tutela Legal ponga un claro signo de ese compromiso con los pobres desde su oficio de pastor.

San Salvador, 17 de octubre de 2013

Fuente: UCA San Salvador

LUCHA ELECTORAL, ENFRENTAMIENTO DE CLASE Y LA ESTRATEGIA DEL IMPERIO

Durante los últimos veinte años el enfrentamiento de clase en El Salvador ha transcurrido en el plano político, por las movedizas arenas de la lucha electoral y como pugna social entre el movimiento popular y la oligarquía representados en el FMLN y ARENA.

El conflicto armado entre dos proyectos históricos se trasladó de los campamentos guerrilleros a los centros de votación. Y lo hizo bajo la mirada penetrante e interesada del imperio, que a la vez cambió a partir de 1992 su anterior estrategia de guerra de contrainsurgencia por la de apoyo vía AID al “fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad.” Y que hoy cuenta con una embajadora de origen puertorriqueño, que mantiene una conveniente posición de bajo perfil, supuestamente más preocupada en la cooperación que en lo político. ¡Ay, Bendito!

El propósito fundamental del gobierno estadounidense junto con toda, con toda la derecha local, desde los Acuerdos de Paz de 1992 es desplazar a la izquierda representada en el FMLN de la lucha por el poder político y reducirla a una fuerza vociferante pero insignificante, a la vez que mantenerla atada y bien atada al circo, perdón, cerco electoral. Y el surgimiento de GANA y posteriormente de Unidad puede contribuir a este fin.

La meta imperial es lograr romper la polarización política entre derecha e izquierda, que es un reflejo de un conflicto social histórico no resuelto y darle paso a la gobernabilidad, a la “tranquilidad social” que significa una situación bajo control, la estabilidad necesaria para que las compañías transnacionales “inviertan” y hagan sus negocios y el gobierno se ponga a su servicio.

Se pretende un espectáculo electoral exclusivamente de derecha, con la derecha y para la derecha. Y este objetivo imperial es hoy más urgente en vista de los desafíos derivados de una correlación de fuerzas a nivel de gobiernos latinoamericanos que le es desfavorable. En esta elección de 2014 se enfrentaran los partidarios de la Alianza del Pacífico y de ALBA. La derecha y la izquierda.

Los Estados Unidos añoran regresar a una situación electoral “segura” como la de 1984 y 1989 en que los candidatos presidenciales eran de ARENA y del PDC, respectivamente Roberto DAubuisson y José Napoleón Duarte, y Félix Cristiani y Fidel Chávez Mena. Y si fuera posible retroceder el reloj medio siglo y regresar a 1962, a los años “dorados” del PCN, con un candidato único de la derecha y los militares, el Coronel Julio Adalberto Rivera. ¿Será...? O estarán pensando en el PRUD de Osorio y de Lemus.

Se engañan aquellos que ven en Unidad una reencarnación de la antigua UNO, que fue un instrumento electoral amplio para enfrentar la dictadura militar. Y se engañan mucho más los que piensan que ha surgido un nuevo Mesías que nos conducirá a la tierra prometida donde no habrá corrupción ni lucha de clases.

Y se engañan también los que piensan de manera triunfalista que con sus propias fuerzas y sin necesidad de alianzas se puede derrotar a la derecha, olvidando que la victoria de 2009 obedeció precisamente a una alianza que incluyó a sectores que hoy desfilan y tiran dulces desde la carroza del candidato de Unidad. Ambos sectores le prestan un insospechado servicio a los que añoran la restauración oligárquica.

Y es que el enfrentamiento entre proletariado y burguesía en El Salvador, como clases sociales del sistema capitalista, difícilmente adquiere los perfiles europeos clásicos, sino que esta mediado por las características de nuestra formación económica-social dependiente latinoamericana. Oligarquía y movimiento popular y sus respectivos intereses antagónicos y evolución histórica refleja con mayor precisión nuestra situación, en el marco del enfrentamiento a nivel global entre imperios y resistencias.

El movimiento popular como expresión de la izquierda ha acumulado una riquísima experiencia en el uso de diversa formas de lucha, legales e ilegales, pacíficas y violentas, rurales y urbanas, etc. Cada una de estas formas de lucha respondió a momentos históricos diferentes en términos de correlación de fuerzas entre sectores populares y oligárquicos. Tuvimos un largo periodo de dictadura militar (1932-1992), luego de guerra popular revolucionaria (1981-1992) y a partir de 1992 de lucha electoral.

La lucha electoral

Y la lucha electoral para la izquierda, tiene sus propios ángeles y sus propios demonios, entre estos el reformismo y el acomodamiento, de la misma forma que la lucha armada tenían el militarismo y la lucha popular el hegemonismo y el sectarismo. De no realizarse una sistemática lucha ideológica contra estas tendencias nocivas, en cada momento, las posibilidades de caer en sus redes son altas.

El otrora ejército guerrillero del FMLN (1980-1992) que derrotó diversas estrategias contrainsurgentes, se transformó en la actual maquinaria electoral partidaria (1993-2013). Las victorias militares fueron sustituidas por las victorias electorales, que incluyen conquistar San Salvador en 1997, los municipios principales alrededor de la capital en 2000, una significativa presencia legislativa, y la presidencia en 2009. Y el reto de seguir como izquierda gobernando el país mediante la victoria en las próximas elecciones presidenciales de febrero de 2014.

Anteriormente, el movimiento popular y sus luchas, tuvo su última época de auge en el periodo de 1974 a 1980 y luego se debilitó y pasó a jugar un papel secundario. Y antes y durante parte del momento anterior hubo un periodo de intensa lucha electoral en el marco de la dictadura militar (1967-1977). Y mucho antes un periodo de lucha popular antidictatorial (57-67).

A continuación exploramos como el enfrentamiento de clases se ha expresado en las diversas formas de lucha implementadas por las fuerzas revolucionarias, así como sus instrumentos, líderes principales y la política de alianzas implementada, hasta llegar a la situación actual.

Las formas de lucha se modifican de acuerdo a la configuración de la lucha de clases, tanto a nivel nacional como internacional. En cada uno de estos momentos señalados hubo una forma de lucha que fue la principal en coexistencia con otras formas de lucha secundarias. Pero el hilo conductor que atraviesa estos momentos es el enfrentamiento de fuerzas sociales antagónicas.

En términos de lucha electoral esta ha sido dominante y una escuela de aprendizaje popular y enfrentamiento social durante dos grandes momentos. El primer momento abarca tres campañas e inicia en 1967 con el PAR y la candidatura del Dr. Fabio Castillo, y luego mediante la UNO en 1972 con la candidatura de José Napoleón Duarte y en 1977 con la candidatura del Coronel Ernesto Claramount y el segundo momento comprende cinco campañas como FMLN, la de Ruben Zamora en 1994, Facundo Guardado en 1999, Schafik Handal en 2004, Mauricio Funes en 2009 y Salvador Sánchez Ceren en 2014. En total en ocho ocasiones se la ha disputado primero a los militares y luego a la derecha la presidencia.

Como contrapartida la dictadura militar impuso como candidatos en 1967 al General Fidel Sánchez Hernández; en 1972 al Coronel Arturo Armando Molina y en 1977 al General Carlos Humberto Romero. Posteriormente, derrotada la dictadura militar, la izquierda se enfrenta a la derecha política, o sea a ARENA, en 1994 a Armando Calderón Sol, en 1999 a Francisco Flores, en 2004 a Antonio Saca, en 2009 a Rodrigo Ávila y en 2014 a Norman Quijano.

Y anteriormente en 1944, con la Unidad Nacional de los Trabajadores, UNT se llevaba como candidato a Alejandro Dagoberto Marroquín, proceso cortado de tajo con el golpe militar del 21 de octubre y más antes se participa directamente como PCS en las elecciones municipales de enero de 1932, días antes de la insurrección, comicios que estuvieron acompañados del fraude electoral y la imposición.

La lucha armada

En términos de lucha armada esta ha sido dominante como forma de lucha durante tres momentos: enero de 1932, como insurrección indígena-campesina; octubre-diciembre de 1944 como preparativos e incursión militar desde Guatemala y enero 1981-enero 1992 como Guerra Popular Revolucionaria con sus respectivos frentes de guerra. Y como posibilidad entre enero 1961-febrero 1963 por medio del FUAR.

Alrededor de la Guerra Popular Revolucionaria se desarrollaron nuevas modalidades de lucha entre estas: la lucha diplomática que desembocó en un proceso de diálogo y negociación; la lucha conspirativa que permitió la construcción de una infraestructura clandestina al servicio de los frentes de guerra; la lucha de solidaridad, que permitió entre otras cosas, la disputa política al interior de

Estados Unidos; la lucha por los derechos humanos, que permitió la denuncia política del régimen y la lucha de masas, que fue reactivada a partir del Comité Pro 1ro. de Mayo en 1983 y que en 1986 crea la UNTS.

En término de lucha de masas esta ha sido dominante a partir de las primeras huelgas artesanales de sastres, panaderos, talabarteros, zapateros y luego de la FRTS, de 1919 a enero de 1932, con la UNT de mayo a octubre de 1944; de 1948 a 1967 con el CROS, la CGTS y la FUSS, de 1974 a 1981 con el FAPU, BPR, LP-28, MLP y UDN, de 1986 a 1992 con la UNTS. Su última cresta fue la lucha contra la privatización de la salud en el 2000-2002.

En términos de lucha política clandestina, en la que la supervivencia del núcleo revolucionario ha sido lo fundamental, esta ha sido dominante desde enero de 1932 a 1940 en respuesta a la represión del General Martínez luego de ser derrotada la insurrección; de octubre 1944 a diciembre de 1948 con el golpe militar y la represión del Coronel Osmin Aguirre y Salinas; de febrero 1950 a marzo 1952 con la ola represiva de Oscar Osorio y de enero 1981 a mayo 1983 con el terror provocado por parte de los escuadrones de la muerte cobijados bajo las diversas juntas civico-militares, aunque en este último caso, el grueso de la conducción revolucionaria se encontraba ya en campamentos guerrilleros o fuera del país.

En términos del instrumento político de 1930 a 1970 es el Partido Comunista. De 1970 a 1980 se consolidan cinco fuerzas políticas de izquierda: FPL, ERP, RN y PRTC, y PCS, las cuales logran unificarse a partir de diciembre de 1980 en el FMLN, aunque la fundación de este fuera en octubre, y el proceso inicia en diciembre de 1979. El nombre FMLN se mantiene hasta la actualidad como partido político, aunque a lo largo de 30 años ha habido diversas rupturas.

En relación a la política de alianzas y la construcción de frentes políticos, es claro que el recién nacido PCS (1930-1932) no estuvo en capacidad de construir un frente común con la dirección política y las masas laboristas-araujistas, ni en lo sindical en la FRTS ni en lo estrictamente electoral, lo que le hubiera permitido aislar a los golpistas del General Martínez y abrir un periodo de democratización, que fue postergado por sesenta años. Los errores de sectarismo ayer como PCS y hoy como FMLN, se pagan caros.

Es hasta inicios de los años cuarenta cuando los comunistas logran junto con sectores progresistas, aprovechar el momento de auge de la lucha antifascista a nivel mundial para forjar vínculos con sectores democráticos del ejército, los que desafiaron al dictador Martínez con el golpe militar del 2 de abril que aunque fracasó marco el inicio del fin de la tiranía, que cae el 8 de mayo como resultado de la huelga general de brazos caídos, en la que los estudiantes universitarios juegan un papel de vanguardia.

Esta experiencia de 1944 fue una riquísima experiencia de aglutinamiento de fuerzas antidictadura militar, lamentablemente no pudo sostenerse entre otras razones por la debilidad de la izquierda y porque la unidad popular se desmoronó.

En términos de fuerzas sociales antagónicas, los trabajadores en sus diversas expresiones (clase obrera artesanal, industrial, campesinos, capas medias urbanas, empleados públicos, desempleados, vendedores ambulantes) han constituido un polo mientras que a nivel de clases dominantes esta se ha mimetizado desde la antigua oligarquía agro-exportadora, pasando por la oligarquía financiera hasta llegar a la actual simbiosis de oligarquía comercial importadora y grupos de capital transnacional.

Cada una de estas formas de lucha mencionadas aparecen y desaparecen de acuerdo a los cambios en la situación política. 1932, 1944 y 1977 marcaron el agotamiento de la vía electoral, como resultado en la primera de la masacre, en la segunda del golpe de estado y en la tercera, del fraude cometido por la dictadura militar; 1992 marcó el agotamiento de la vía armada, iniciada en 1981, como resultado de la reforma política pactada en los Acuerdos de Paz; enero de 1981 con la primera ofensiva militar del FMLN marcó el agotamiento de la vía de la lucha de masas iniciada en 1974 con el surgimiento del FAPU; mayo de 1944 y enero de 1992 marcó el agotamiento de la situación de clandestinidad absoluta y el paso a la vida legal de los comunistas en el primer caso y de los revolucionarios del FMLN en el segundo caso.

El dilema de la izquierda salvadoreña

Y la pregunta que se plantea a los revolucionarios y revolucionarias salvadoreños es si existe un agotamiento de este camino electoral y cual sería la alternativa. Debemos de preguntarnos si estamos próximos a un nuevo momento o nos encontramos todavía en la cresta de la lucha electoral. Pienso que lo electoral no está agotado, pero que únicamente con lo electoral difícilmente podremos avanzar hacia la ruptura del modelo.

Debemos de evitar la visión voluntarista que exige el cambio de rumbo de la forma de lucha electoral sin ninguna alternativa viable, la cual conduciría a un descalabro y a un retroceso, así como la visión espontaneista que defiende la situación actual de inmovilidad y visión electorera, que está conduciendo a la pérdida de los principios revolucionarios, en particular del antiimperialismo y la visión de clase.

Es por lo tanto urgente reactivar el movimiento popular y sus luchas, para garantizar la necesaria acumulación que permita la ruptura. Existe temor a orientarse hacia este camino porque se considera que podría afectar la acumulación institucional lograda como FMLN que es considerable. Pero de no hacerlo, lo más seguro es que terminemos administrando el sistema que alguna vez deseamos transformar.

Y además en este punto incide el factor internacional y como nos posicionamos en la actual correlación de fuerzas entre imperios y resistencias a nivel internacional y continental, lo cual influye poderosamente en la configuración de una estrategia revolucionaria orientada a la ruptura del modelo neoliberal, del sistema capitalista y de la dependencia imperial.

Estamos en un nuevo momento en el que la hegemonía estadounidense es desafiada globalmente por la emergencia del G-20 y del BRICS. Y esto se expresa en nuestra región latinoamericana en la existencia de un importante polo de resistencia antiimperialista (el ALBA) cristalizado en los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y naturalmente Cuba. Este polo influye en Uruguay, Argentina e incluso en El Salvador. Y mantiene una alianza estratégica con Brasil. Y está enfrentado a la recién creada Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile), a la cual El Salvador está invitado a ingresar. Es una disputa. Y el que ocupe la presidencia a partir del 2014 decide. El que pispilea pierde...y no deberíamos de perder.

La reunión en Bali, Indonesia

El próximo round del enfrentamiento entre imperios y resistencias a nivel global será en Indonesia, en la preciosa isla de Bali del 3 al 6 de diciembre. Ahí se celebrará la IX Conferencia Ministerial de la OMC integrada por 159 países. Las dos anteriores (2009 y 2011) fueron en Ginebra. Antes en Hong Kong. Y recordamos en 2003, la de Cancún, México.

El fantasma de la ronda de Doha que pretende liberalizar el comercio mundial, continuará apareciendo como el invitado principal a este encuentro en el que asumirá por vez primera un brasileño, Roberto Azevedo, el mando de este organismo internacional. Y se hablará de agricultura, comercio, e inversiones, y nos interesa. Los imperios pretenden continuar subsidiando a sus agricultores y bloqueando el ingreso libre a los productos de los países en resistencia.

El escenario electoral

La segunda vuelta es la peor pesadilla tanto para Arena como para el FMLN, mientras es el sueño dorado de Unidad. El problema radica en que las tres variables existentes obligan a la búsqueda de alianzas. Si la segunda vuelta es entre Quijano y Sánchez Ceren ¿a quien apoyará la base de Saca? A Quijano. Si es entre Quijano y Saca ¿a quien apoyará la base de FMLN? A Saca. Y si es entre Saca y Sánchez Ceren ¿a quien apoyará la base de ARENA? A Saca.

La única manera que el FMLN puede garantizar su permanencia en el gobierno es mediante una gran alianza política que rebasa la que permitió el gane del presidente Funes. Pero nada indica que se estén haciendo esfuerzos en esta dirección y el tiempo va pasando y ya pronto estaremos frente a un hecho consumado.

Y este escenario electoral a esta altura está contaminado por tres situaciones: uno, la crisis al interior del órgano judicial promovida por las fracciones legislativas de FMLN y Gana para desarticular la Sala

de lo Constitucional, la cual perjudica electoralmente a Sánchez Ceren y a Saca y beneficia a Quijano; dos, la situación de la delincuencia, en la cual el tema de la tregua entre pandillas lejos de despertar el respaldo ciudadano (voto futuro) lo ahuyenta y la situación del enjuiciamiento de funcionarios del gabinete Flores por el caso CEL-ENEL. En el caso de la tregua entre pandillas por su posición el beneficiado a nivel electoral es Quijano y en el caso del juicio político a Flores-Bang el beneficiado es Sánchez Ceren.

La cautela por parte del FMLN con respecto al ideario antiimperialista le permitió comprometer sus votos para el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y mantener un cuidadoso silencio sobre el TLC, la ILEA y la Base Militar de Comalapa para no “desentonar” en el “unánime” concierto partidario nacional. Pero estas actuaciones le restan votos en el estratégico sector de la “clase media urbana.”No pueden seguir confiando en ganar las presidenciales del 2014 en la disciplina de su “voto duro.”

Por su parte, el capital transnacional aunque seguramente preferiría a alguien de derecha, no pierde el sueño acerca del futuro mandatario salvadoreño. Confía que cuentan con los resortes económicos, diplomáticos y mediáticos que les permitirían enderezar cualquier desviación sospechosa de rumbo. Es el núcleo oligárquico con su recién creado G-20 el que sueña apasionadamente con presenciar en junio de 2014 a un humillado presidente Funes entregarle la banda presidencial al candidato de ARENA, Norman Quijano.

Fuente: Roberto Pineda. CEPRID

GUATEMALA

GUATEMALA EN EL OLVIDO

Los años 80 del siglo pasado se podrían calificar como los años de la solidaridad con Guatemala; la década de los 90 como la de la cooperación internacional con ese país centroamericano. Sin embargo, a partir de la entrada en el nuevo siglo, posiblemente la palabra que mejor define la relación mundial con Guatemala es el olvido. En torno a la firma de los Acuerdos de Paz (1996) se desató un interés bienintencionado, o no, por respaldar el proceso de paz. Pero, el paso del tiempo y el incumplimiento reiterado por parte de los sucesivos gobiernos guatemaltecos de los mencionados acuerdos no tuvo otra respuesta de la comunidad internacional que el olvido y la indiferencia absoluta hacia las condiciones políticas y sociales de los pueblos maya, xinca, garífuna y mestizo, aquellos que verdaderamente sufrieron el genocidio que supuso la guerra abierta por el estado de Guatemala contra su población.

Hoy Guatemala, aunque perdida en la memoria de nuestras sociedades y en las crónicas de los medios de comunicación, vive en una situación neocolonial que hace que la mayoría de sus pueblos sufran los caprichos y avatares de los intereses de las transnacionales y de los mercados, además de los de una mínima élite guatemalteca dominante (apenas una veintena de familias). Este país centroamericano está abierto al expolio más absoluto e inconsulto, con una violación permanente de los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos por la comunidad mundial y ratificados por los sucesivos gobiernos de ese país.

Pero es que la historia de Guatemala es, en gran medida, la crónica de un estado-nación nunca acabado, nunca construido, pese a que hace casi 200 años que se produjo la teórica independencia de la metrópoli colonizadora. En realidad, y como en otros muchos países del continente, el proceso que se abrió en esos años es el que se puede denominar como de colonialismo interno. La nueva élite política y económica criolla sustituyó a la vieja de corte colonial; sin embargo, las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales se mantuvieron sin cambios reales. Las grandes mayorías, generalmente indígenas, permanecieron en la marginación y la explotación como mano de obra barata al servicio de los nuevos poderes.

El nuevo estado-nación se erigió sobre los elementos básicos y fundamentales de la colonia: el racismo, la discriminación y la exclusión contra los pueblos maya, xinca, garífuna y gran parte también contra la población mestiza. Y hoy, en pleno siglo XXI, esta situación persiste, hundida y

enraizada en las estructuras centrales de este país. Durante los 36 años del denominado conflicto armado interno esto quedó ampliamente demostrado. En realidad, y tal y como recientemente se verificó en el juicio contra el ex-dictador, general Efraín Ríos Montt (1982-83), lo que se produjo en esos años contra el pueblo maya fue un genocidio. Más de 250.000 muertes, un millón de personas desplazadas de sus territorios, 250.000 refugiadas en el exterior, más de 400 aldeas mayas arrasadas y masacradas hablan claramente de la política que practicó el ejército guatemalteco durante el conflicto armado.

Y como se ha señalado anteriormente, la firma de los Acuerdos de Paz no acabó con esta situación de discriminación. Hoy estos pueblos sostienen que siguen inmersos en un proceso de genocidio que se traduce en la libre disposición de sus territorios por parte de las transnacionales mineras, petroleras e hidroeléctricas principalmente. Los reconocimientos de los derechos de estos pueblos (22 de ascendencia maya, más el pueblo xinca y el garífuna) para definir su vida, sus modelos de existencia, el manejo de sus territorios, en definitiva el derecho a una vida digna, son desconocidos en el día a día y de forma cada vez más sistemática. Los mencionados derechos figuran en los Acuerdos de Paz, pero también en la propia constitución del estado y en convenios y tratados internacionales como el 169 de la OIT (1989) o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007).

Un ejemplo sintomático de esta continua violación de derechos hace referencia directa al de consulta y reconocimiento de la organización social y política propia. En los últimos años, ante el incumplimiento de los gobiernos de la obligación de consultar a los pueblos ante un hecho, proyecto o proceso que les afecte directa o indirectamente (Convenio 169-OIT), y ante el aluvión de concesiones a transnacionales para la explotación, uso y abuso sobre sus territorios, se han realizado de forma autónoma 72 consultas comunitarias. Éstas han mantenido los procedimientos tradicionales de las comunidades y en todas ha habido una supervisión nacional y, en muchos casos, internacional validando estos procesos como transparentes y adscritos al derecho reconocido por el ya citado Convenio 169. Se buscaba el posicionamiento libre, participativo y democrático de la población ante una agresión a sus territorios, realizada por las transnacionales (españolas en determinados casos) mineras y/o hidroeléctricas con el respaldo pleno del gobierno. Los resultados, abrumadoramente mayoritarios a favor de la defensa y respeto a los territorios, se han trasladado al congreso de la república, quien sistemáticamente los ha ignorado. Obviamente, para esta institución y para el gobierno de turno tiene más valor el interés económico de cualquiera de estas empresas que el pensamiento, deseos y posicionamiento de la población. Se ignoran así los derechos políticos de participación, de consulta, de organización y otro largo número de derechos individuales y colectivos. Por el contrario, se protegen abiertamente los intereses de las transnacionales y, además, se criminaliza la protesta y resistencia como respuesta a las continuas violaciones de derechos. Esto último alcanzando en los últimos años los más graves niveles como reflejan las detenciones de líderes y lideresas, los asesinatos selectivos, amenazas de violencia sexual contra las mujeres, declaraciones de estados de sitio y recientemente casos de masacres: Totonicapán hace un año, y hace unas semanas San José Nacahuil, con 11 muertos y 15 heridos por un ametrallamiento indiscriminado sobre la población; u ocupaciones y represión generalizada como el caso en estos días de la comunidad de Barillas, en lucha permanente contra la transnacional española Econer-Hidralia.

Toda esta situación actual y el previo proceso histórico es lo que permite afirmar que el colonialismo interno en Guatemala sigue siendo una triste y dura realidad. Las bases de discriminación y marginación, de empobrecimiento y explotación, de exclusión y racismo, siguen operando como pilares fundamentales del país, constituyendo la política del estado y de las clases oligarcas.

Pero esta situación es cambiable, es transformable. La organización comunitaria en torno a las consultas ha supuesto que esta población pueda romper el silencio al que estaba condenada, desde los años más oscuros del genocidio. Estas consultas han propiciado procesos amplios de reflexión, de análisis, de debates y de expresión de sentimientos por parte de los pueblos maya y xinca, que hacía demasiados años que habían sido condenados al destierro, al olvido en la creencia interiorizada de que esos eran derechos solo para los pudientes y no para los empobrecidos, no para los eternamente relegados por el colonialismo. Otro hecho que ha incidido en esta ruptura de

reclusión y parálisis ha sido el proceso de enjuiciamiento del general Ríos Montt. Nunca se imaginó que esto pudiera darse: el proceso y condena contra un genocida vivo. Sin embargo, fue la valentía de las mujeres ixiles la que abrió esta puerta para denunciar lo ocurrido durante la política de tierra arrasada que practicó el ejército. Por cierto, en aquel momento, el hoy presidente de Guatemala Otto Pérez Molina era oficial en el territorio ixil, teniendo la responsabilidad sobre varias de las masacres acaecidas en esa área. El juicio celebrado en 2013 en el que se denunciaron y probaron los hechos ha llevado a la condena del ex-dictador a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Ciertamente es que posteriormente las presiones ejercidas por los oscuros poderes de siempre llevaron al alto tribunal a desconocer el juicio y ahora éste deberá repetirse. Sin embargo, esto no ha hecho sino poner en evidencia una vez más los ocultos intereses de la clase dominante, económica, política y militar y el carácter no democrático y racista del estado guatemalteco. Y, ocurra lo que ocurra, el juicio ya ha sido una victoria para los pueblos de Guatemala.

Todo esto es lo que la comunidad internacional sigue ignorando y/o mantiene en el olvido, con el fin de que los intereses económicos sigan gozando de inmejorables condiciones para la explotación de los recursos naturales y humanos en el marco de la doctrina neoliberal y neocolonial. Por eso, por la justicia y la solidaridad internacional como compromiso ético y político es por lo que corresponde ahora acabar ya con el olvido y recuperar la memoria y la responsabilidad internacional para la dignidad de la vida de todos los hombres y mujeres, de todos los pueblos de Guatemala.

Fuente: Jesus González Pazos. Rebelión

HAITÍ

HAITÍ FRENTE A LAS DEBACLES POLÍTICAS Y ECOLÓGICAS

Las montañosas tierras de Haití, han sido testigos de históricas e innumerables hecatombes ocurridas tanto en el plano político como medioambiental. La dominación esclavista seguida de gobiernos sátrapas y dictatoriales, han conllevado a la sistemática crisis socioeconómica y política del país, acrecentada por reiteradas catástrofes naturales, que golpean a un territorio extremadamente deforestado e indefenso frente al cambio climático.

Estas debacles no solo han dejado a la población haitiana en condiciones de extrema vulnerabilidad, sino que han sido argumento y justificación para que un consabido grupo de mercenarios internacionales engruese sus haberes con vastas consecuencias para la soberanía del pueblo haitiano.

Andamiaje sociohistórico

Haití es considerado el país más pobre de Latinoamérica y el Caribe, sin embargo, fue el primero que conquistó libertades políticas al promulgar en 1804 su independencia de Francia, la abolición de la esclavitud y la proclamación de un gobierno “de y para” los afroantillanos. La Rebelión de los cimarrones, ex cautivos en las fincas cafetaleras y productoras de caña de azúcar, representó una afrenta para los colonizadores europeos quienes impusieron una deuda histórica como forma de indemnización y castigo.

Durante sus primeros 100 años de vida, el país fue dirigido por una seguidilla de militares que se enquistaron en el poder delineando regímenes autocráticos y represivos. La constante confrontación entre mulatos y negros no permitió la consolidación de un Estado unificado política y socialmente, quedando la construcción del proyecto país relegada. En tanto, las actividades económicas fueron monopolizadas a manos de una burguesía blanca y extranjera compuesta en su mayoría por inmigrantes alemanes y holandeses, mientras que la sociedad haitiana se estructuró en base a un antagonismo de clases fundamentado en el racismo.

A inicios del siglo XX, alertado por el dominio económico europeo en un territorio de interés geoestratégico, Estados Unidos -aludiendo a la Doctrina Monroe- invadió Haití, ocupación militar que perduró 19 años hasta 1934. A través de su presencia, el imperio intentó influenciar la cultura político-administrativa del país sin mayores resultados y pretendió reafirmar la vocación agrícola

actuando en detrimento de las masas campesinas. Este episodio dejó un escenario sociopolítico candente que dio paso a una nueva era de represión rampante.

En 1957 la llegada al poder del dictador François Duvalier “Papa Doc” determinó la historia política de Haití, desatando a partir de su figura mesiánica vinculada al vudú, el control absoluto de la población. El ejercicio del monopolio desmesurado de la violencia, se institucionalizó en el quehacer represivo del cuerpo militar de los “Tontons Macoutes”, milicia que instaló en las áreas rurales sus propias reglas y formas de extorsión. Duvalier estructuró un sistema dictatorial basado en el culto a la personalidad, modificando la constitución para ser reelegido y autoproclamándose como presidente vitalicio con derecho a sucesión en 1964. Se calcula que durante su régimen murieron más de 30.000 civiles. Su dinastía se prologó con el ascenso al poder en 1971 de su hijo Jean Claude Duvalier o “Baby Doc” quien asumió el cargo de presidente vitalicio a los 19 años de edad, dedicándose a amasar una enorme fortuna a costa de diversos ilícitos. Hacia 1986, un movimiento popular derroca la dictadura Duvaleriana, sucediéndole una serie de gobiernos militares.

Para entonces, el sacerdote Jean Bertrand Aristide se había perfilado como figura política de relevancia vinculado a la teología de la liberación y reconocido por su actuar a favor de los derechos de la clase oprimida en Haití. En 1991, se celebran las primeras elecciones democráticas del país y Aristide es elegido presidente, siendo derrocado solo siete meses más tarde por un nuevo golpe militar encabezado por Raoul Cédras.

Después de el exilio en Venezuela y luego en Estados Unidos, Aristide retoma el poder hacia 1994, facilitando la injerencia de Washington en los asuntos internos del país, conllevando –entre otros- a la disolución de las Fuerzas Armadas y su reemplazo por un cuerpo de Policía Nacional. En 1996, llega a la presidencia René Préval, quién impulsa una serie de reformas neoliberales.

Hacia el año 2001, Aristide gana nuevamente las elecciones presidenciales y se ubica como aliado geopolítico de las izquierdas latinoamericanas representadas por Cuba y Venezuela, gobernando bajo una fuerte presión política orquestada por U.S.A, la derecha y sus grupos armados (Frente de Resistencia Artibonito y Nuevo Ejército). Durante este período, su gobierno es criticado por no contener la corrupción y remontar la economía, siendo derrocado en 2004 por un golpe armado. El presidente del tribunal supremo Boniface Alexandre, asume la conducción del país y solicita a Naciones Unidas su intervención militar para apaciguar la crisis sociopolítica, estableciéndose la “Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití” –MINUSTAH-.

El año 2006, René Préval asume por segunda vez la presidencia y se le acusa de influenciar las elecciones del 2011, desatando una crisis electoral y política, resuelta a partir de negociaciones que derivan en la proclamación del actual presidente Michel Martelly, cuestionado por sus estrechas relaciones con la diplomacia estadounidense.

Hecatombe ambiental

Haití o “Tierra de Montañas” en idioma Creole, abarca la parte occidental de la isla “La Hispaniola” que comparte con la vecina nación de República Dominicana. Siendo un territorio de morfología montañosa en clima tropical, la geografía haitiana ha sufrido abruptas transformaciones producto de siglos de explotación indiscriminada de sus recursos naturales. Es así como en la época colonial, se talaron grandes extensiones boscosas a fin de convertirlas en terrenos aptos para el monocultivo intensivo de la caña de azúcar, llegando el territorio haitiano a ser el principal productor azucarero de las Antillas. Desde entonces, la deforestación se fue instalando como una práctica común y constante, y que hoy tiene como principal objetivo la producción de carbón vegetal para consumo humano.

Esta histórica e indiscriminada deforestación ha generado como consecuencias la degradación de las cuencas, la erosión de los suelos, la pérdida de cobertura vegetal y la desaparición de flora y fauna nativa –entre otros-. Panorama de devastación ambiental que vuelve al territorio haitiano extremadamente vulnerable frente a las inclemencias naturales que azotan con frecuencia a la isla (sequías, ciclones, terremotos) y agudizan los efectos derivados del cambio climático como el aumento de la temperatura en zonas desérticas sin paragua vegetal alguno.

La crisis ecológica ha comprometido insoslayablemente la soberanía alimentaria a través del deterioro de las labores agrícolas, la pérdida de las semillas criollas entre los campesinos y los recursos fitogenéticos del país, subsumiendo a sus habitantes en una escasez alimenticia extrema, con matices pero especialmente crítica, en la zona fronteriza del Noreste.

Rehabilitar el territorio con especies nativas y alimenticias, multiplicar sistemas agroecológicos y técnicas para la captación de aguas y el despliegue de energías renovables son algunas de las esperanzas que albergan las montañas haitianas.

Mercenarios de la inestabilidad

Es consabido que las constantes situaciones de inestabilidad política, económica y ambiental en torno a las que deambula el país, han conllevado a que las tierras haitianas sean el foco de diversidad de acciones de “ayuda” emprendidas por entidades externas entre las que se cuentan la cooperación internacional, organismos de Naciones Unidas, ONGs y Fundaciones. Algunas de estas iniciativas, se mueven motivadas más que por amainar crisis políticas y catástrofes naturales, por intereses económicos y foráneos.

En la actualidad, el caso más emblemático es la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití –MINUSTAH-, conformada en 2004 por soldados de ejércitos de todo el mundo y de algunos países de Latinoamérica entre los que se cuentan: Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador y Brasil.

Este proceso militarista, que inició bajo el pretexto de brindar seguridad al país, ha conllevado a un injustificado aumento de la violencia y la criminalización, mermando la soberanía del pueblo haitiano que se pregunta ¿quién controla a los cascos azules de MINUSTAH? Reconocidos como soldados mercenarios e inmunes que a costa de la represión, la corrupción, la obstaculización hacia el ejercicio de la ciudadanía, y el resguardo a los intereses de las transnacionales, suelen reeditar a sus haberes entre 4000 y 6000 dólares mensuales.

Se les acusa además, de haber introducido el cólera en Haití través de soldados nepaleses que contaminaron las aguas del río Artibonito. Hoy en día, juegan un rol estratégico para facilitar el despojo de los recursos a favor de multinacionales mineras de capitales Estadounidenses y Canadienses tales como Unigold y Barrick Gold.

La restitución de los derechos políticos y civiles del pueblo, y la soberanía sobre sus recursos naturales deben ser el motor de toda acción sensata que busque orientarse en territorio haitiano, reconociendo la dignidad de un pueblo que no deja de cantar su vocación antiesclavista.

Fuente: María José Araya Morales. Mapuexpress

HONDURAS

PROGRAMAS ELECTORALES

El candidato del partido de gobierno a la presidencia de la República, Juan Orlando Hernández, presentó a la colectividad nacional su plan de gobierno (2014-2018), con una visión de muy largo plazo ya que espera que su partido gobierne Honduras por 50 años. El plan se denomina “Un Plan Para Todos para una Vida Mejor”. Focaliza sus intervenciones en cinco propuestas:

- a) Programa de Vida Mejor, que busca remodelar las casas de las 800 mil familias más pobres de Honduras con un paquete social básico que incluye eco fogones, piso de cemento, techo digno, filtro de agua, huerto familiar y letrina.
- b) Bono Diez Mil incrementado a 800 mil familias más pobres de Honduras, para que las madres mandes sus hijos a las escuelas con 200 días de clase garantizados por el Ministro de Salud Marlon Escoto y a los chequeos médicos.
- c) Policía Militar ya en operación, para combatir el crimen y garantizar la paz y seguridad de la población, incluyendo según denuncias, la persecución de los disidentes políticos.

d) Programa con Chamba Vivís Mejor, para crear 100,000 nuevos empleos que beneficie a los jóvenes y mujeres jefes de hogar con un financiamiento de 52 millones de dólares.

e) Ley Fundamental de Educación, para transformar el sistema educativo nacional con una enseñanza de calidad y el uso masivo de la tecnología con la participación de todos los actores, incluyendo la creación de colegios privados para acceder a fondos públicos.

La candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro, presentará su plan de gobierno a finales del mes de octubre, pero de los discursos pronunciados y comparencias públicas destacan las siguientes propuestas.

a) Red Solidaria, como un programa de la presidencia de la Republica orientado a la protección social y desarrollo de 500 mil familias pobres, integrando las acciones de entrega de bonos (incluyendo el bono tecnológico) y servicios de apoyo, prevención en salud y desarrollo de la infraestructura básica y productiva.

b) En el marco anterior, continuar con la entrega de bono diez mil para las familias en situación de pobreza e indigencia.

c) Policía Social Comunitaria, que integra a todas las fuerzas de la comunidad y la policía en lucha contra la delincuencia, e impulse desde la base una reforma integral-menos burocrática, autoritaria y corrupta- de la seguridad pública.

d) Programa de micro empresas solidarias para generar 120,000 nuevos empleos, integrando el sector informal de la economía para que accedan a crédito, asistencia técnica y tecnología productiva que en la actualidad ha sido vedado por la banca privada tradicional.

e) Reforma Concertada del Sistema Educativo Nacional.

El partido LIBRE enarbola la bandera del socialismo democrático en contraposición al neoliberalismo, cuyas bases conceptuales, filosóficas y pragmáticas se encuentran en varios documentos publicados. Ello implica conformar instrumentos de política derivados de los grandes objetivos de desarrollo de la humanidad, tal como sucedió en países como Ecuador y Bolivia. No se trata de satanizar la inversión extranjera y al mercado como algunos piensan, sino de poner como primera prioridad la reproducción de la vida humana (trabajo productivo de calidad) y de los recursos naturales y ambientales frente al gran capital (R. Correa).

Estos grandes objetivos se resumen en:

a) Garantizar la reproducción de los medios materiales de vida de la población

b) Garantizar la reproducción sostenida de la naturaleza y bienes ambientales

c) Acceso universal a la salud, educación, aseguramiento social y agua y saneamiento de la población.

Artículo completo en <http://alainet.org/active/68445>

MÉXICO

CONDENAMOS ASESINATO DE LUCHADORA SOCIAL EN ATOYAC, GUERRERO

A los organismos de Derechos Humanos,

A las organizaciones independientes,

Al pueblo en general.

Pronunciamiento: Condenamos asesinato de la luchadora social Rocío Mesino Mesino de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS)

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), expresa su más enérgica condena por la ejecución extrajudicial de la compañera de lucha Rocío Mesino Mesino integrante de la Organización

Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y exigimos el pronto esclarecimiento de estos hechos y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen.

En el Estado de Guerrero como en el resto del país se está implementando la ejecución extrajudicial para eliminar las voces de protesta incómodas para el Estado, en este sentido se lleva a cabo una política de la persecución, hostigamiento y en algunos casos el asesinato como es el caso de la compañera Rocío Mesino comprometida con las causas populares.

Desde la imposición oligárquica de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república, se ha orquestado una política de represión y criminalización en contra del movimiento popular, para imponer de manera violenta las reformas neoliberales que necesitan en el país; también recurren a la práctica de la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial de luchadores sociales, la utilización de grupos paramilitares, guardias blancas y grupos de choque, como medidas fascistas y estrategias de terror en el pueblo organizado y no organizado.

Esta política de Estado es la que priva en todo el país y se aplica de manera sistemática contra luchadores sociales, opositores al régimen, activistas sociales y en general a todo sector que se organiza de manera independiente, para desarticular, dividir y desorganizar todo movimiento organizado.

Responsabilizamos al gobierno de Ángel Aguirre Guerrero y al de Enrique Peña Nieto (EPN) de este crimen cometido en contra de la compañera Rocío Mesino Mesino; y Exigimos juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Atentamente

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen!

¡Libertad inmediata de todos los presos políticos y de conciencia en el país!

¡Alto a la militarización y paramilitarización en el país!

¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular!

¡Juicio y castigo a los criminales de estado!

¡No a las reformas neoliberales en el país!

¡Nuestro apoyo y solidaridad con el magisterio democrático en el país!

¡Por la unidad, obrero, campesino, indígena y popular!

Web: <http://fnls.mayfirst.org>

Blog: <http://fnls.blogspot.mx>

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

NICARAGUA

ALERTA ROJA POR DENGUE

El Gobierno de Nicaragua decretó alerta roja sanitaria a nivel nacional para enfrentar de manera intensa el peligroso brote de dengue que afecta al país.

Este jueves se incrementó el número de fallecidos. Una joven de 15 años habitante del barrio Cristo del Rosario en Managua se convirtió en la décimo tercera víctima mortal del dengue. Hasta el momento las autoridades de salud contabilizan 13 muertos, 57 personas hospitalizadas y más de 4,000 casos confirmados.

Guillermo González, director del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) dio a conocer el comunicado 01-2013, donde se emite la alerta roja sanitaria, que está acompañada por la ejecución de una cantidad de acciones para la destrucción de criaderos de mosquito y evitar más contagios.

“Los análisis epidemiológicos hasta el momento señalan que existen las condiciones ambientales propicias para que continúe la propagación del dengue, dado que aún no se tiene control sobre el

vector, a pesar de las medidas que se han venido incrementando en las últimas semanas y que colocan en alto riesgo a la población en general”, dijo González.

Según el decreto, la Secretaría del Sinapred a través de sus delegados en los departamentos apoyarán en los procesos de coordinación con otras instituciones para el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias. Además faculta a las autoridades municipales a tomar las medidas necesarias para aplicar el control sanitario del dengue.

PLAN ESPECIAL

Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía dijo que se ha instruido preparar un Plan Especial que permita enfrentar esta amenaza a la vida con medidas especiales, particularmente en la ciudad de Managua. Además destacó que el plan incluye la concentración de los equipos para incrementar las fumigaciones casa a casa.

Por su parte, Sonia Castro, ministra de Salud aseguró que iniciará a realizar visitas casa a casa en el municipio de Managua por la alta de concentración poblacional para destruir criaderos y buscar casos febriles para dar las orientaciones a la población

También la fumigación se realizará casa a casa, para lo cual dispondrán de 360 máquinas-hombres con el propósito de visitar aproximadamente 100 casas por hombre, hasta cubrir en su totalidad el municipio de Managua, y posteriormente todo el territorio nacional.

Según las autoridades, normalmente para cubrir toda la ciudad de Managua se necesitan de tres a cuatro semanas, no obstante, ahora se espera cubrirla en una semana haciendo turnos extraordinarios.

La ministra Castro también exhortó a la población a permitir el ingreso a las viviendas para realizar la fumigación, ya que la institución reporta un índice entre un 5 y 15 por ciento de casas cerradas al momento de la fumigación.

Tomado de La Prensa

PANAMÁ

FRENTE SANTEÑO CONTRA LA MINERÍA

El Frente Santeño contra la Minería (FRESACOMI) vuelve a la carga y “exige el cierre de la Minera Cerro Quema por violación flagrante de la concesión minera y por cometer numerosos atentados en contra del ambiente santeño”. El comunicado fue hecho público la semana pasada sin que los medios lo recogieran y reprodujeran.

En la actualidad, Panamá cuenta con tres proyectos mineros que están acabando con el medio ambiente. Además, están explotando los yacimientos mineros sin beneficio alguno para el país. El más próspero es la mina Petaquilla en Donoso en Colón. Produce varias toneladas de oro que genera cerca de mil millones de dólares al año para sus dueños sudafricano-canadienses. Le sigue Santa Rosa, en Cañazas, Veraguas, abandonada temporalmente creando un problema sin solución para las comunidades agropecuarias del área. En la lista se destaca Cerro Quema, en Los Santos, cuya población tiene años de pedir que sus abusos se regulen. Todas las minas tienen en común que son a cielo abierto, produciendo efectos negativos sobre la vida humana, fauna y flora.

Entre los aspirantes a la Presidencia de la República para 2014, sólo el candidato independiente Juan Jované ha señalado que pondrá fin a la explotación a cielo abierto de la minería en Panamá.

El proyecto que duerme una larga siesta pero amenaza con despertarse debido a los altos precios del cobre en el mercado internacional es Cerro Colorado. Se encuentra en el corazón de la Comarca Ngobe Buglé y los expertos dicen que tiene reservas con un valor de 70 mil millones de dólares. En la actualidad, hay cierto interés en su explotación pero el costo social es muy elevado. Cerro Colorado presenta dos alternativas para viabilizar su explotación. Ambas muy caras. Por un lado, mediante un proyecto bien planificado que tome en cuenta la población que vive en el área. Por el otro, un plan represivo para aplastar y/o expulsar a la población ngobe del área.

Cerro Quema en Los Santos está causando problemas desde hace varias décadas. Incluso, en 1997, por los abusos cometidos contra las comunidades de Azuero, fue clausurada y multada por el gobierno de aquella época. Los inversionistas encontraron la fórmula para regresar a la faena. Las comunidades de la región están obligadas a regresar al campo de batalla.

El Frente Santeño Contra la Minería (FRESACOMI), agrupación de comunidades, gremios y asociaciones, encabeza la lucha contra la explotación minera irresponsable de la empresa. La semana pasada sacaron un comunicado que ningún medio publicó por las razones conocidas. Los santeños señalan que “se oponen al desarrollo de proyectos mineros en la provincia de Los Santos” y aprovechan de “expresar a la comunidad nacional su posición en torno a los desastres ambientales que durante los últimos meses se están produciendo en el proyecto minero de Cerro Quema”.

El comunicado “denuncia los altos niveles de sedimentación a que están sometidos el río Quema y otras quebradas (quebrada Mala, quebrada El Africano y quebrada El Gallote). El Frente plantea que los daños son “una muestra evidente de negligencia ambiental de parte de Minera Cerro Quema S.A.” El Frente también denuncia que los daños llegaron a su máxima expresión en julio y “continúa sin control, debido a que los llamados muros de gaviones no han cumplido su cometido”. El Frente indica que “se construyeron tarde y sin los requisitos técnicos reglamentarios”.

Según el comunicado, “las plataformas que se han edificado en el cerro generaron gran cantidad de tierra que fue tirada por la falda del cerro, inundando predios privados y acabando con bolsones de áreas boscosas”. Como consecuencia, las áreas colindantes han sido afectadas. Los ganaderos de la región están sufriendo páramos ya que las fincas colindantes no cuentan con las fuentes de aguas tradicionales.

Según los miembros del Frente, el gobierno ignora los desmanes que realiza la empresa minera en Cerro Quema. El comunicado “hace del conocimiento público, así como de las autoridades competentes, que se han realizado perforaciones en zonas para las cuales no existe autorización... Es el caso de Idaida y La Pelona, todo ello a espaldas de los organismos reguladores del Estado panameño”. El Frente agrega que la empresa minera ha pasado por encima de leyes y reglamentos. “Se construyeron carreteras en terrenos privados sin la autorización previa de sus dueños, lo que representa una flagrante violación de la propiedad privada. En Idaida se hicieron dos perforaciones durante el mes de julio y otros dos huecos se perforaron en La Pelona”.

Las comunidades santeñas alertan al país “sobre las inconsistencias de la Minera Cerro Quema, que son las mismas por las cuales se multó y cerró en el año 1997, lo que demuestra su alto nivel de irresponsabilidad, no sólo en lo atinente al tema ambiental, sino sobre las repercusiones futuras de un proyecto que parece estar destinado al fracaso y a la destrucción del maltrecho sector ambiental de la provincia de Los Santos”.

El comunicado, firmado por los dirigentes Secundino Jaén y Arturo Moreno, concluye exigiendo a la ANAM y al Ministerio de Comercio el cierre de la mina en Cerro Quema por violar las cláusulas de la concesión.

Informa: Marco A. Gandásegui en Alainet.org

VENEZUELA

HABILITAR AL PUEBLO BOLIVARIANO ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE

Firman este artículo: Carlos Carcione, Stalin Pérez, Juan García, Gonzalo Gómez, Zuleika Matamoros, Alexander Marín, por la coordinación nacional de Marea Socialista. Caracas, 20 de octubre de 2013

*Copiamos la **introducción** de un largo estudio programático*

El nombramiento de Rafael Ramírez como Vicepresidente del área económica frenó en seco el avance del nuevo sistema de cambio de divisas elaborado en cinco meses de negociaciones entre el

gobierno, la oligarquía local y el capital financiero. Sistema que de haberse aplicado, hubiera significado un golpe mortal para el control estatal de la Renta Petrolera ¹. Al mismo tiempo la noche del martes 8 de octubre, el discurso del Presidente Nicolás Maduro, leído ante la Asamblea Nacional, despertó expectativas en el angustiado pueblo chavista, que espera resultados contundentes y rápidos en la lucha contra la gran corrupción, contra la usura, la especulación, el desabastecimiento y el chantaje que continúan. La guerra económica no se ha detenido y sigue horadando la base social y política del gobierno. Mientras que los voceros de la oposición declaran a los cuatro vientos su propósito de salir como sea del presidente. La situación ha entrado en una nueva fase. La apuesta de los dirigentes de la MUD, más allá de sus diferencias internas, es convertir las elecciones de Alcaldes y concejales en un plebiscito nacional contra Maduro.

Pretenden demostrar la supuesta ilegitimidad del gobierno actual y forzar y acelerar los tiempos del reemplazo del presidente ². Para conseguir este plan que no ocultan, mantienen y profundizan la guerra económica, la batalla mediática y, si logran su objetivo electoral, buscarán desarrollar un calentamiento de calle con violencia incluida, exponencialmente superior al del 15 al 17 de abril pasado. Está vez apoyado en la parálisis y desmoralización que pretenden conseguir del Pueblo Bolivariano, castigado brutalmente por la especulación, la usura y por la desorientación provocada por meses de política errática, equivocada y que conduce a una conciliación abierta con la burguesía por parte del gobierno. En este escenario la burguesía y la MUD pretenden jaquear la supervivencia en el cargo del presidente Maduro y, con ello, la suerte futura del proceso bolivariano.

Sin embargo no es el único peligro que amenaza al proceso. Está a la vista, para el que quiera ver la realidad, que la ausencia física del comandante Chávez ha abierto una disputa interna por la hegemonía política dentro del chavismo. El debate sobre las medidas económicas y el otorgamiento de dólares, debate que por cierto no ha terminado ³, ha sido hasta ahora la primera expresión categórica y pública de esta disputa. Pero no la única. Mientras el presidente Maduro ha comenzado a denunciar a la burguesía parasita, y a declarar que entramos en una etapa de la revolución donde hay que avanzar a la destrucción del Estado Burgués, calificadas voces del Alto Gobierno insisten en llamar a cooperar a una supuesta “burguesía patriótica o nacionalista” con la que añoran llegar a acuerdos estratégicos, desnudando así su carácter conciliador.

En este escenario el pedido de Habilitante que ha hecho el presidente es una batalla política importante. Una oportunidad para poner en marcha un cambio en la correlación de fuerzas que nos permita salir de la posición defensiva que hoy tiene el proceso. La condición para que esto sea posible es que: el contenido político de esa Habilitante, las medidas que se diseñen a partir de ella, vayan en el sentido de atacar los graves problemas que tiene el pueblo que vive de su trabajo y lo haga de manera inmediata. No se puede hablar de Guerra Económica, que la hay, sin un plan de contraofensiva que movilice todas las fuerzas que defienden el proceso.

La preparación de la contraofensiva en nuestras filas es esencial: ha llegado el momento de abrir al interior de las fuerzas bolivarianas, el debate de fondo sobre la orientación de la actual etapa de la Revolución. Es el momento de poner en claro las ideas. Las de los dirigentes que quieran defender el legado de Chávez y las del pueblo bolivariano, que está llamado a volver a ocupar su lugar como fuerza motriz y vanguardia en este momento crucial.

Coordinación Nacional de Marea Socialista - Rebelión